



Roj: **ATS 2507/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2507A**

Id Cendoj: **28079140012020200491**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Social**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **05/03/2020**

Nº de Recurso: **1504/2019**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Recurso de casación para la unificación de doctrina**

Ponente: **MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA**

Tipo de Resolución: **Auto**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Auto núm. /

Fecha del auto: 05/03/2020

Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA

Número del procedimiento: 1504/2019

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excm. Sra. D.^a María Luisa Segoviano Astaburuaga

Procedencia: T.S.J.CATALUÑA SOCIAL

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz

Transcrito por: AML / V

Nota:

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 1504/2019

Ponente: Excm. Sra. D.^a María Luisa Segoviano Astaburuaga

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Auto núm. /

Excmo. Sr. y Excmas. Sras.

D.^a. María Luisa Segoviano Astaburuaga

D. Antonio V. Sempere Navarro

D.^a. Concepción Rosario Ureste García

En Madrid, a 5 de marzo de 2020.

Ha sido ponente la Excm. Sra. D.^a María Luisa Segoviano Astaburuaga.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 7 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 4 de junio de 2018, en el procedimiento nº 459/15 seguido a instancia de D. Manuel contra el Excmo. Ayuntamiento de Montcada

I Reixac y Zurich Insurance PLC, sobre reclamación de cantidad por accidente laboral, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 10 de diciembre de 2018, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 18 de marzo de 2019 se formalizó por el procurador D. Francisco Sánchez García en nombre y representación de D. Manuel, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 15 de enero de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión planteada consiste en decidir si concurre la caducidad de la instancia apreciada por la sentencia impugnada, porque antes de que se produjera la prescripción, el trabajador instó primero su reclamación en vía administrativa ante el ayuntamiento demandado, y este la desestimó indicando en su resolución que la vía de impugnación adecuada era la contencioso administrativa. Con arreglo a ello, el trabajador presentó demanda en los juzgados de lo contencioso administrativo, obteniendo resolución de 20 de enero de 2015 que indicaba que la jurisdicción competente era la social (notificaba el día 26 siguiente). Por lo que el 18 de mayo de 2015 el trabajador planteó demanda ante los juzgados de lo social que fue desestimada por caducidad de la instancia, al haber transcurrido el plazo de 2 meses a que hace referencia el art. 69.2 ET.

Frente a lo anterior el trabajador argumentaba en suplicación que la errónea indicación de la administración debía producir la suspensión de los plazos de caducidad y [la interrupción] de la prescripción. La sentencia de suplicación impugnada de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 10 de diciembre de 2018 (R. 5374/2018), confirma dicha resolución porque no es la errónea indicación la cuestión debatida, porque se aprecia la caducidad al haber excedido el plazo de los 2 meses desde la resolución de la jurisdicción contencioso administrativa que declaraba la incompetencia de jurisdicción.

SEGUNDO.- Recurre el trabajador demandante insistiendo en su pretensión y seleccionando de contraste (DIOR 14 de mayo de 2019) la sentencia de esta Sala de 23 de abril de 2013 (R. 2090/2012), en la que se decide si a los efectos de acoger o no la excepción de caducidad de la acción por despido, debe tenerse en cuenta la información errónea de la Administración sobre la forma del cómputo del plazo para el ejercicio de dicha acción.

En ese caso el 13-06-2011 el ayuntamiento demandado comunicó verbalmente al demandante la finalización ese mismo día de la relación laboral, recibiendo el día 17 siguiente comunicación escrita reiterando la comunicación anterior, con expresión de las causas del despido, y advirtiéndole de que "contra la presente resolución, previa a demanda ante el Juzgado de lo Social, deberá interponer ante la Alcaldía reclamación previa a la vía laboral, de conformidad con lo dispuesto en el art. 120.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El plazo para presentación de la reclamación será de un mes desde el siguiente a esta notificación. Una vez resuelta ésta o desestimada por silencio administrativo por el transcurso de un mes sin notificación conforme al art. 125.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, podrá interponerse la citada demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de 20 días desde la Resolución o desestimación en virtud de lo dispuesto en los arts. 69, 103 y 114 del Real Decreto 2/1995 de 7 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la ley de procedimiento laboral, ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se considere conveniente a su derecho". El trabajador planteó reclamación previa el día 12-07-2011, seguida de demanda que fue desestimada por caducidad de la acción. El trabajador recurrió en suplicación y allí fue estimado su recurso y declarada la improcedencia del despido, siendo confirmada dicha resolución por la sentencia de esta Sala en unificación de doctrina.

La sentencia razona que, de acuerdo con la doctrina que cita, la información errónea dada por la administración para el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción debe dar lugar a la estimación de la demanda, porque es relevante en orden a la conducta procesal del trabajador demandante, en la forma de computar el plazo, pues se le informó que el plazo corría desde la notificación de la resolución y no desde la fecha de efectos del despido, con el descuento de los días correspondientes a la reclamación previa.

En los casos de alegación de posible infracción procesal la Sala ha establecido una doctrina flexibilizadora que se plasma en el Acuerdo adoptado en el Pleno no jurisdiccional de fecha 11-02- 2015, en el que se decidió que "Al analizar la contradicción en materia de infracciones procesales se exigirá siempre la concurrencia de la suficiente homogeneidad en la infracción procesal respectiva, con objeto de que se pueda examinar una divergencia de doctrinas que deba corregirse respecto de alguno de los aspectos propios de la tutela judicial efectiva" y que "Cuando en el recurso se invoque motivo de infracción procesal las identidades del art. 219.1 LRJS deben estar referidas a la controversia procesal planteada, sin que sea necesaria la identidad en las situaciones sustantivas de las sentencias comparadas". De modo que en estos casos la exigencia de las identidades del citado art. 219 LRJS no hay que referirla a la cuestión sustantiva que constituye el fondo del asunto, sino a la controversia procesal planteada, siendo preciso que concurra en ese extremo la suficiente homogeneidad entre las infracciones procesales comparadas porque, de lo contrario, dada la naturaleza de esas infracciones, se acabaría dando a las mismas el tratamiento procesal de la casación ordinaria, lo que no resulta admisible en este recurso extraordinario de unificación de doctrina, tal como lo señalan, entre otras, las recientes SSTs 12-12-17 (R. 3279/2015), 21-2-18 (R. 920/2016), 1-3-18 (Rec 1422/2016).

En este caso, no se aprecia la homogeneidad requerida porque las instituciones comparadas son diversas - la caducidad de la instancia en la recurrida, y la caducidad de la acción en la de contraste -, y producen consecuencias distintas, pues la primera es una norma de tutela administrativa que no impide nuevamente el ejercicio de la acción cuando esta se encuentra viva, mientras que la segunda supone inexorablemente el fin de la acción ejercitada, con lo que la trascendencia del error en uno y otro caso tampoco es la misma. Pero es que además, en el caso concreto de la sentencia recurrida el error producido sobre la jurisdicción competente no afecta al plazo del art. 69.2 LRJS, que se computa desde el pronunciamiento de inadmisión por incompetencia de jurisdicción, mientras que en la de contraste el error sí es trascendente porque fijaba el *dies a quo* del cómputo del plazo de impugnación del despido en fecha posterior a la que procedía (en la notificación de la resolución y no en la fecha del despido), provocando con ello la caducidad de la acción.

TERCERO.- Al margen de lo dicho, el recurso tampoco lleva a cabo una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, en los términos establecidos en el art. 224.1 a) LRJS, en relación con los arts. 221.2.a) y 219 de dicha Ley, pues dicho requisito exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de sus fundamentos a través de un examen comparativo que, aunque no sea muy detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida, al Ministerio Fiscal y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos (por todas, SSTs 25-7-18 Rec 664/2017; 28-11-18 Rec 3808/2016 y 20-12-18 Recs 1055/2017 y 3288/2017 y 6-2-19 Rec 283/2017). En su lugar la recurrente se limita a exponer la doctrina existente y a fundamentar la infracción legal.

CUARTO.- Por lo que, vistas las alegaciones de la parte recurrente, y de conformidad con lo establecido en los arts. 219.1, 225.3.4 y 5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Manuel , representado en esta instancia por el procurador D. Andrés Fernández Rodríguez, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 10 de diciembre de 2018, en el recurso de suplicación número 5374/18, interpuesto por D. Manuel , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Barcelona de fecha 4 de junio de 2018, en el procedimiento nº 459/15 seguido a instancia de D. Manuel contra el Excmo. Ayuntamiento de Montcada I Reixac y Zurich Insurance PLC, sobre reclamación de cantidad por accidente laboral.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.